

2005

## La Prohibición de la Tortura: Un Análisis Sistemático de las Interpretaciones Jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Sobre las Violaciones al Artículo 5 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos

Xavier Andrés Flores Aguirre

Follow this and additional works at: <http://digitalcommons.wcl.american.edu/auilr>



Part of the [Human Rights Law Commons](#), and the [International Law Commons](#)

---

### Recommended Citation

Aguirre, Xavier Andrés Flores. "La Prohibición de la Tortura: Un Análisis Sistemático de las Interpretaciones Jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Sobre las Violaciones al Artículo 5 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos." *American University International Law Review* 21, no.1 (2005): 43-70.

This Academy on Human Rights and Humanitarian Human Rights Award is brought to you for free and open access by the Washington College of Law Journals & Law Reviews at Digital Commons @ American University Washington College of Law. It has been accepted for inclusion in *American University International Law Review* by an authorized administrator of Digital Commons @ American University Washington College of Law. For more information, please contact [fbrown@wcl.american.edu](mailto:fbrown@wcl.american.edu).

# LA PROHIBICIÓN DE LA TORTURA: UN ANÁLISIS SISTEMÁTICO DE LAS INTERPRETACIONES JURISPRUDENCIALES DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS SOBRE LAS VIOLACIONES AL ARTÍCULO 5 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

XAVIER ANDRÉS FLORES AGUIRRE\*

|  |    |
|--|----|
| INTRODUCCION.....  | 44 |
| I. CONSIDERACIONES CONCEPTUALES SOBRE<br>TORTURA Y TRATOS CRUELES, INHUMANOS Y<br>DEGRADANTES.....   | 46 |
| A. PROHIBICIÓN DE LA TORTURA Y TRATOS CRUELES,<br>INHUMANOS Y DEGRADANTES .....  | 46 |
| B. CONCEPTUACIÓN DE LA TORTURA Y LOS TRATOS<br>CRUELES, INHUMANOS Y DEGRADANTES.....   | 47 |
| C. LA TORTURA PSICOLÓGICA.....   | 48 |
| D. LA GRAVEDAD DE LOS ACTOS CONSTITUTIVOS DE<br>TORTURA, TRATOS CRUELES, INHUMANOS Y<br>DEGRADANTES, Y SU EVOLUCIÓN .....                        | 49 |
| E. VINCULACIÓN DE LA PROHIBICIÓN DE TORTURA Y<br>TRATOS CRUELES, INHUMANOS Y DEGRADANTES CON<br>OTROS ARTÍCULOS DE LA CONVENCIÓN AMERICANA ..... | 50 |
| F. INFERENCIA SOBRE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA<br>INTEGRIDAD PERSONAL .....   | 51 |

---

\* Abogado de los Juzgados y Tribunales de la Republica y Licenciado en Ciencias Políticas y Sociales. Actualmente Profesor de Legislación Aduanera en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Ecuador y Profesor de Historia de América Latina y Sociología en la Universidad Blue Hill.

|  |    |
|--|----|
| G. ALLANAMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO ANTE LA CORTE POR VIOLACIONES AL DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL .....   | 54 |
| II. APLICACION DE LA NOCION DE TORTURA Y TRATOS CRUELES, INHUMANOS Y DEGRADANTES.....  | 55 |
| A. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR LAS CONDICIONES DE DETENCIÓN DE LOS RECLUSOS .....   | 55 |
| B. CONDICIONES DE CIERTAS PRISIONES ANALIZADAS POR LA CORTE INTERAMERICANAS .....  | 59 |
| 1. <i>La Incomunicación Coactiva</i> .....   | 61 |
| 2. <i>Aislamiento Prolongado y Atención Médica</i> .....   | 62 |
| C. RESPONSABILIDAD ESTATAL POR VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL A MENORES DE EDAD .....  | 65 |
| D. INTRODUCCIÓN DE LA VICTIMA EN EL MALETERO DE UN VEHÍCULO Y EL FENÓMENO DEL CORREDOR DE LA MUERTE ( <i>DEATH ROW PHENOMENON</i> ) .....  | 66 |
| E. CONSECUENCIAS DE UN INCENDIO EN UN LUGAR PROTEGIDO POR EL ESTADO, PRESENTACIÓN INFAMANTE DE LAS VÍCTIMAS EN SITUACIONES DE CARÁCTER PÚBLICO, Y LA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 5 EN PERJUICIO DE LOS FAMILIARES DE LA VÍCTIMA ..... | 67 |
| CONCLUSION .....   | 69 |

## INTRODUCCIÓN

El propósito de este artículo consiste en analizar la jurisprudencia contenciosa en materia de fondo emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“Corte Interamericana”) en torno al “Derecho a la Integridad Personal” consagrado en el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos<sup>1</sup> (“Convención Americana” o “CADH”). Así, para la elaboración del artículo me he

---

1. *Ver* Convención Americana Sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, Costa Rica, del 22 de noviembre de 1969, 1144 U.N.T.S. 123, *disponible en* <http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-32.html> (última visita el 8 de agosto de 2005).

circunscrito al estudio de jurisprudencias en materia de fondo que tratan la cuestión de la integridad personal tal cual se halla ésta consagrada en el artículo 5 de la CADH. He omitido el análisis de las opiniones de la Corte Interamericana relativas a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, sus criterios expresados en Opiniones Consultivas, o las ideas de los jueces expuestas en sus votos. Asimismo, he excluido el uso de la bibliografía especializada en materia de integridad personal debido a la propia naturaleza del artículo, cuya pretensión didáctica exceptúa la erudición de terceros en su redacción, devota exclusivamente de los juicios y las evoluciones de la Corte Interamericana en materia del derecho a la integridad personal.

Cabe indicar que tampoco hago acopio de *todas* las situaciones relativas a la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes que se han presentado ante la Corte Interamericana. Haciendo una paráfrasis a lo dicho por Jorge Luís Borges, quien afirmaba que “los espejos y la cópula son abominables porque multiplican el número de los hombres,”<sup>2</sup> vale referir que la multiplicación de las descripciones de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes también serían abominables, tanto en virtud de su propia naturaleza (no en vano prohibida de manera absoluta en el derecho internacional de los derechos humanos) como por sus atroces circunstancias y su excesivo número, que sin duda excedería de los propósitos de este artículo y de las bases del concurso en que éste participa. A efectos de la finalidad del artículo, principalmente didáctica, he dividido el estudio de la materia propuesta en: (1) consideraciones conceptuales sobre tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes; (2) aplicación de la noción de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes; y (3) una breve conclusión. Las dos primeras divisiones comprenden varios acápites que desarrollan los puntos fundamentales tratados por la Corte Interamericana, principalmente, a través de casos que mejor ilustran los alcances de la Corte en cada aspecto específico que ésta ha encarado.

---

2. Ver JORGE LUIS BORGES ET AL., OBRAS COMPLETAS 431 (Editorial Emecé, Décimotercera Edición 2002).

# I. CONSIDERACIONES CONCEPTUALES SOBRE TORTURA Y TRATOS CRUELES, INHUMANOS Y DEGRADANTES

## A. PROHIBICIÓN DE LA TORTURA Y TRATOS CRUELES, INHUMANOS Y DEGRADANTES

La Corte Interamericana ha reconocido en varias ocasiones que la prohibición absoluta de todas las formas de tortura, tanto física como psicológica, pertenece al dominio del *jus cogens*.<sup>3</sup> Tal prohibición tiene un carácter “absoluto e inderogable,” incluyendo en caso de guerra, amenaza de guerra, lucha contra el terrorismo u otros graves delitos, estado de sitio, conflicto interior, suspensión de garantías constitucionales, inestabilidad política interna y otras emergencias o calamidades públicas,<sup>4</sup> cuya primera mención fue hecha en el *Caso Cantoral Benavides* donde se determina que con independencia de si los abusos constituían torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ambos tipos de actos se hallan “estrictamente prohibidos” en cualquier circunstancia<sup>5</sup> y cuyo fundamento se

---

3. *Ver* *Tibi v. Ecuador*, Sentencia del 7 de septiembre del 2004, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 114, ¶ 143 (2004); *ver también* *Hermanos Gómez Paquiyauri v. Perú*, Sentencia del 8 de julio del 2004, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 110, ¶ 112 (2004); *Maritza Urrutia v. Guatemala*, Sentencia del 27 de noviembre del 2003, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 103, ¶ 92 (2003) (presentando el artículo 51 de la CADH que ampara la dignidad del ser humano ante cualquier situación de tortura psicológica).

4. *Ver* *Lori Berenson Mejía v. Perú*, Sentencia del 25 de noviembre del 2004, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 119, ¶ 100 (2004); *ver también* *De las Flores Cruz v. Perú*, Sentencia del 18 de noviembre del 2004, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 15, ¶ 125 (2004); *Caso Tibi*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 114, ¶ 143; *Instituto de Reeducción del Menor v. Paraguay*, Sentencia del 2 de septiembre del 2004, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 112, ¶¶ 157-58 (2004); *Caso Hermanos Gómez Paquiyauri*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 110, ¶ 111; *Caso Maritza Urrutia*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 103, ¶ 89; *Cantoral Benavides v. Perú*, Sentencia del 18 de agosto del 2000, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 69, ¶ 95 (2000) (hallándose esta jurisprudencia de la Corte Interamericana, en plena concordancia con el artículo 27.2 de la CADH, la cual no autoriza la suspensión de este derecho ni aún en caso de guerra, peligro público u otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado).

5. *Ver* *Caso Cantoral Benavides*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 69, ¶ 95; *ver también* *Bámaca Velásquez v. Guatemala*, Sentencia del 25 de noviembre del 2000, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 70, ¶ 154 (2000).

hallaba en jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos.<sup>6</sup>

Específicamente, la Corte Interamericana ha expresado que el hecho de que un Estado haga frente a una situación de terrorismo no debe implicar restricciones a la protección de la integridad física de la persona.<sup>7</sup> Asimismo, todo uso de la fuerza que el Estado realice, para que no constituya un atentado a la dignidad humana, debe ser estrictamente justificado por el comportamiento de la persona detenida.<sup>8</sup>

#### B. CONCEPTUACIÓN DE LA TORTURA Y LOS TRATOS CRUELES, INHUMANOS Y DEGRADANTES

La Corte ha caracterizado a la infracción del derecho a la integridad física como “una clase de violación que tiene diversas connotaciones de grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes cuyas

---

6. Ver *Caso Cantoral Benavides*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 69, ¶ 95 (recalcando la Corte Interamericana que, tal como su homóloga Europea lo ha precisado, en varias ocasiones, tal prohibición rige incluso en aquellos casos más difíciles para el Estado, por ejemplo, casos que involucran la agresión por terrorismo y el crimen organizado a gran escala); ver también *Ireland v. United Kingdom*, 25 Eur. Ct. H.R. (ser. A) en 65 (1978); *Labita v. Italia*, App. No. 26772/95, 2000-IV Eur. Ct. H.R. 99, 126, 131; *Selmouni v. France*, App. No. 25803/94, 1999-V Eur. Ct. H.R. 149, 235; *Chahal v. United Kingdom*, App. No. 22414/93, 1996-V Eur. Ct. H.R. 1831, 1855; *Tomasi v. France*, 241 Eur. Ct. H.R. (ser. A) en 42 (1992) (reconociendo que “el artículo 3 de la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, análogo al artículo 5 de la CADH prohíbe en términos absolutos la tortura o las penas o tratos inhumanos o degradantes, cualesquiera que sean los actos de la víctima”). La Corte también establece: “Así, el artículo 3 no prevé ninguna excepción, en lo cual contrasta con la mayoría de los preceptos de la Convención . . . y . . . no admite derogación, ni siquiera en el caso de un peligro público que amenace la vida de la nación.” *Id.*

7. Ver *Caso Cantoral Benavides*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 69, ¶ 96; ver también *Castillo Petruzzi et al. v. Perú*, Sentencia del 30 de mayo de 1999, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 52, ¶ 197 (1999); *Loayza Tamayo v. Perú*, Sentencia del 17 de septiembre de 1997, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 33, ¶ 57 (1997).

8. Ver *Caso Loayza Tamayo*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 33, ¶ 57; ver también *Caso Castillo Petruzzi et al.*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 52, ¶¶ 196-97; *Caso Bámaca Velásquez*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 70, ¶ 155; *Ribitsch v. Austria*, 336 Eur. Ct. H.R. (ser. A) en 26 (1995).

secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta.”<sup>9</sup> La Corte ha expresado que puede calificarse como torturas físicas y psíquicas aquellos actos que han sido “preparados y realizados deliberadamente contra la víctima para suprimir su resistencia psíquica y forzarla a autoinculparse o a confesar determinadas conductas delictivas o para someterla a modalidades de castigos adicionales a la privación de la libertad en sí misma.”<sup>10</sup>

La tortura, ha dicho la Corte, no puede solamente perpetrarse mediante la violencia física sino también a través de actos que produzcan en la víctima un sufrimiento físico, psíquico o moral agudo.<sup>11</sup> En ese orden de ideas, las amenazas y el peligro real e inminente de someter a una persona a lesiones físicas produce, en determinadas circunstancias, una angustia moral de tal grado que puede considerársela como tortura psicológica.<sup>12</sup>

### C. LA TORTURA PSICOLÓGICA

La jurisprudencia internacional ha desarrollado la noción de tortura psicológica. La Corte Europea, por ejemplo, ha establecido que es suficiente para ello el mero peligro de que vaya a cometerse alguna de las conductas prohibidas por el artículo 3 de la Convención Europea, siempre que el riesgo de que se trate sea real e inmediato. En consecuencia, la amenaza de tortura a alguien puede constituir, al menos, trato inhumano.<sup>13</sup> La misma Corte Europea ha expresado que

---

9. *Ver Caso Loayza Tamayo*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 33, ¶ 57.

10. *Ver Tibi v. Ecuador*, Sentencia del 7 de septiembre del 2004, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 114, ¶ 146 (2004); *ver también Maritza Urrutia v. Guatemala*, Sentencia del 27 de noviembre del 2003, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 103, ¶ 104 (2003).

11. *Ver Caso Cantoral Benavides*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 69, ¶ 100.

12. *Ver Caso Tibi*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 114, ¶ 147; *ver también Caso Maritza Urrutia*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 103, ¶ 92; *19 Comerciantes v. Colombia*, Sentencia del 5 de julio del 2004, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 109, ¶ 149 (2004); *Caso Cantoral Benavides*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 69, ¶ 102; *Campbell and Cosans v. United Kingdom*, 48 Eur. Ct. H.R. (ser. A) en 12 (1982).

13. *Ver Caso Cantoral Benavides*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 69, ¶ 102; *ver también Caso Campbell*, 48 Eur. Ct. H.R. en 12.

para la determinación de la violación del artículo 3 de la Convención Europea es necesario tomar en cuenta no sólo el sufrimiento físico sino la angustia moral.<sup>14</sup> Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha considerado la amenaza de hacer sufrir una persona una grave lesión física como “tortura psicológica.”<sup>15</sup> Con fundamento en lo anterior, la Corte Interamericana concluyó, por primera vez, en la existencia de un régimen jurídico internacional de prohibición absoluta de todas las formas de tortura.<sup>16</sup>

#### D. LA GRAVEDAD DE LOS ACTOS CONSTITUTIVOS DE TORTURA, TRATOS CRUELES, INHUMANOS Y DEGRADANTES, Y SU EVOLUCIÓN

Sobre el análisis de la gravedad de los actos que puedan constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes o tortura, la Corte ha expresado que dicho análisis es relativo y depende de todas las circunstancias del caso, tales como la duración de los tratos, sus efectos físicos y mentales y, en algunos casos, el sexo, edad y estado de salud de la víctima, entre otros.<sup>17</sup> Asimismo, la Corte ha reconocido el carácter evolutivo de las calificaciones de tortura o actos crueles, inhumanos o degradantes de ciertos actos. Actos que en el pasado fueron calificados como tratos inhumanos o degradantes podrían, en el futuro, ser calificados como torturas, en virtud de las crecientes exigencias de protección de los derechos y de las libertades fundamentales a las que corresponde una mayor firmeza

---

14. *Ver Caso Cantoral Benavides*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 69, ¶ 102; *ver también* *Soering v. United Kingdom*, 161 Eur. Ct. H.R. (ser. A) en 44-45 (1989).

15. *Ver Caso Cantoral Benavides*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 69, ¶ 102; *ver también* Informe del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, *Views of the Human Rights Committee Under Article 5, Paragraph 4, of the Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights*, ¶¶ 8.6, 10, Com. No. 74/1980, U.N. Doc. CCPR/C/18/D/74/1980 (23 de marzo de 1983).

16. *Ver Caso Cantoral Benavides*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 69, ¶ 103.

17. *Ver Hermanos Gómez Paquiyauri v. Perú*, Sentencia del 8 de julio del 2004, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 110, ¶ 113 (2004); *ver también* *Ireland v. United Kingdom*, 25 Eur. Ct. H.R. (Ser. A) en 65 (1978).



para enfrentar las infracciones a los valores básicos de las sociedades democráticas.<sup>18</sup>

E. VINCULACIÓN DE LA PROHIBICIÓN DE TORTURA Y TRATOS  
CRUELES, INHUMANOS Y DEGRADANTES CON OTROS  
ARTÍCULOS DE LA CONVENCIÓN AMERICANA

En relación con el artículo 1.1 de la CADH, el derecho a la integridad personal no sólo implica que el Estado debe respetarlo (obligación negativa), sino que, además, requiere que el Estado adopte todas las medidas apropiadas para garantizarlo (obligación positiva).<sup>19</sup> Así también, en virtud de la relación con el artículo 1.1 de la CADH, en caso de existencia de razón fundada para sospechar de la comisión de un acto de tortura, la Corte ha señalado el deber del Estado de iniciar de oficio y de manera inmediata, de conformidad con la obligación general de garantizar y respetar los derechos a toda persona emanada del artículo 1.1 de la CADH, una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables. En el *Caso Tibi*, por ejemplo, la Corte estableció que el Estado no actuó en consonancia con las obligaciones descritas y declaró que tal conducta constituía una violación del artículo 5 de la CADH.<sup>20</sup>

En relación con el derecho a la vida, consagrada en el artículo 4 de la CADH, desde sus primeras jurisprudencias la Corte descartó que la violación del derecho a la vida lesione de manera automática también el artículo 5 de la Convención Americana, porque, en sus

---

18. Ver *Caso Cantoral Benavides*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 69, ¶ 99; ver también *Caso Selmouni*, 1999-V Eur. Ct. H.R. en 237.

19. Ver *Instituto de Reeducción del Menor v. Paraguay*, Sentencia del 2 de septiembre del 2004, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 112, ¶ 158 (2004); ver también *Caso Hermanos Gómez Paquiyauri*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 110, ¶ 129; 19 *Comerciantes v. Colombia*, Sentencia del 5 de julio del 2004, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 109, ¶ 153 (2004); *Myrna Mack Chang v. Guatemala*, Sentencia del 25 de noviembre del 2003, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 101, ¶ 153 (2003).

20. Ver *Tibi v. Ecuador*, Sentencia del 7 de septiembre del 2004, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 114, ¶ 159 (2004) (declarando también la obligación de investigar en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura).

propias palabras, “no es este el sentido del citado precepto.”<sup>21</sup> Con relación a los numerales del propio artículo 5 de la CADH, la Corte ha vinculado el artículo 5.6 de la CADH relativo a la reforma y readaptación social de los condenados, como la finalidad esencial de las penas privativas de libertad, con el artículo 5.2 de la CADH debido a que las condiciones de encierro que impliquen un deterioro de la integridad física, psíquica y moral, estrictamente prohibidas en este último artículo, y que constituyan una forma de pena cruel, se entiende que contrarían los propósitos del artículo 5.6. de la CADH.<sup>22</sup>

#### F. INFERENCIA SOBRE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL

La Corte no cuenta, en el marco de los procesos que llegan a su conocimiento, con todos los hechos diáfananamente establecidos para resolverlo. En varias ocasiones tiene que recurrir a inferencias lógicas que le permitan concluir la existencia de violaciones. En ese aspecto, las violaciones al derecho a la integridad personal son paradigmáticas. Por ejemplo, en el *Caso 19 Comerciantes*, la Corte infirió a partir de premisas consistentes en hechos probados que las víctimas habían recibido un trato agresivo en extremo durante las horas anteriores a su muerte, más aún si se toma en consideración que para los grupos “paramilitares” las víctimas eran colaboradoras de los grupos guerrilleros. Tal cuestión la Corte la deduce a partir de la brutalidad con la cual fueron tratados los cuerpos de las víctimas después de su ejecución, lo cual le permite a ésta inferir que el trato que recibieron previo a ésta fue también extremadamente violento, de manera tal que pudieron temer y prever su futura y violenta privación de la vida. Tales inferencias condujeron a la Corte a declarar que el Estado era responsable de la violación del artículo 5 en perjuicio de las víctimas.<sup>23</sup>

En el *Caso Villagrán Morales (Caso de los “Niños de la Calle”)*, la Corte dedujo que dado que los jóvenes fueron retenidos

---

21. Ver Neira Alegría et al. v. Perú, Sentencia del 19 de enero de 1995, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 20, ¶ 86 (1995); ver también Durand y Ugarte v. Perú, Sentencia del 16 de agosto del 2000, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 68, ¶ 78 (2000).

22. *Caso Berenson*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 119, ¶ 101.

23. Ver *Caso 19 Comerciantes*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 109, ¶ 150.

clandestinamente por sus captores durante un lapso de 10 a 21 horas, período que medió entre dos hechos probados de extrema violencia, a saber, la aprehensión forzada y la muerte por impactos de arma de fuego en estado de indefensión, “[e]s razonable inferir, aunque no mediaran otras evidencias al respecto, que el trato que recibieron durante esas horas fue agresivo en extremo.”<sup>24</sup> Es razonable inferir, además, que durante ese período de tiempo en que los jóvenes permanecieron aislados del mundo exterior y seguramente conscientes que sus vidas corrían grave peligro, esa sola circunstancia, les produjo una situación de extremo sufrimiento psicológico y moral.<sup>25</sup> La Corte, para llegar a su conclusión, también hizo referencia al acervo probatorio en el cual se evidenciaba que los hechos materia de este caso fueron realizados en un contexto de mucha violencia contra los niños y jóvenes que vivían en las calles, tal violencia incluía como componente principal a los diversos tipos de torturas y malos tratos.<sup>26</sup> Es evidente, entonces, que los jóvenes mencionados fueron víctimas de malos tratos y torturas, y el Estado fue declarado responsable de la misma.<sup>27</sup>

En el *Caso Humberto Sánchez*, la Corte sostuvo que, si bien no tenía elementos probatorios para determinar con precisión los días o las horas en los cuales estuvo detenido el mencionado por la ilegalidad de la detención, basta que haya sido un breve tiempo para que se configure, dentro de los estándares del derecho internacional de los derechos humanos, una conculcación a su integridad psíquica y moral.<sup>28</sup> Así también, la Corte dijo que cuando se presentan circunstancias como las sucedidas a Juan Humberto Sánchez se permite inferir, aún cuando no mediaran otras evidencias al respecto,

---

24. Ver Villagrán Morales et al. v. Guatemala, Sentencia del 19 de noviembre de 1999, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 63, ¶ 162 (1999).

25. Ver id. ¶ 163.

26. Ver id. ¶ 167.

27. Ver id. ¶ 168.

28. Ver Juan Humberto Sánchez v. Honduras, Sentencia del 7 de junio del 2003, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 99, ¶ 98 (2003); ver también Bámaca Velásquez v. Guatemala, Sentencia del 25 de noviembre del 2000, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 70, ¶ 128 (2000); Cantoral Benavides v. Perú, Sentencia del 18 de agosto del 2000, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 69, ¶¶ 82-83 (2000); *Caso de los Niños de la Calle*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 63, ¶¶ 162-63.

que el trato que la víctima recibió durante su incomunicación fue inhumano, degradante y agresivo en extremo.<sup>29</sup> La Corte sostuvo que a Juan Humberto Sánchez le fue violado su derecho a la integridad personal.<sup>30</sup> Sobre el particular, el Tribunal destacó que, en la noche del 11 de julio de 1992, antes de ser aprehendido por los militares, Juan Humberto Sánchez se encontraba en condiciones físicas normales, por lo que el Estado debería explicar razonablemente, lo sucedido. A la fecha de la sentencia, el Estado no había proporcionado una explicación razonable de cómo y por qué apareció el cadáver de Juan Humberto Sánchez en las condiciones descritas, configurándose así una violación del artículo 5 de la Convención Americana.<sup>31</sup>

Ya en los primeros casos hondureños, con base en investigaciones y testimonios, la Corte había concluido que existía un trato despiadado a los detenidos, quienes eran sometidos “a todo tipo de vejámenes, torturas y demás tratos crueles, inhumanos y degradantes.” Tal trato implicaba la violación al artículo 5 de la CADH.<sup>32</sup> En la aplicación de tales asertos en el *Caso Velásquez Rodríguez y Godínez Cruz*, la Corte carecía de la capacidad de probar que éstos hayan padecido torturas físicas. Sin embargo, concluyó que el mero hecho de que las circunstancias de su secuestro hayan quedado a cargo de autoridades cuya participación en “vejámenes,” crueldades y torturas se halla comprobada, representaba la violación por parte del Estado de Honduras del deber de prevención impuesto por el artículo 1.1 de la CADH en relación con los párrafos 1 y 2 del artículo del mismo instrumento. En efecto, dentro de la garantía de la

---

29. Ver *Caso Humberto Sánchez*, 2003 Corte I.D.H. (Ser. C) No. 99, ¶ 98; ver también *Caso Bámaca Velásquez*, 2000 Corte I.D.H. (Ser. C) No. 70, ¶ 150; *Caso Cantoral Benavides*, 2000 Corte I.D.H. (Ser. C) No. 69, ¶¶ 83-84, 89; *Caso de los Niños de la Calle*, 1999 Corte I.D.H. (Ser. C) No. 63, ¶ 162.

30. Ver *Caso Humberto Sánchez*, 2003 Corte I.D.H. (Ser. C) No. 99, ¶ 100.

31. *Id.*

32. Ver *Caso Velásquez Rodríguez*, Sentencia del 29 de julio de 1988, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 5, ¶ 156 (1988) (señalando que “las investigaciones que se han verificado donde ha existido la práctica de desapariciones y los testimonios de las víctimas que han recuperado su libertad demuestran que ella incluye el trato despiadado a los detenidos”); ver también *Caso Godínez Cruz*, Sentencia del 20 de enero de 1989, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 4, ¶ 197 (1989).

integridad física de toda persona se halla “la prevención razonable de situaciones virtualmente lesivas de los derechos protegidos.”<sup>33</sup>

Hubo casos, sin embargo, en los cuales la Corte, a falta de inferencias lógicas sobre la existencia de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, decidió declarar no violado el artículo 5 CADH. En el *Caso Neira Alegría*, por ejemplo, la Corte no encontró prueba que Víctor Neira Alegría, Edgar Zenteno Escobar y William Zenteno Escobar hayan sido objeto de malos tratos o su dignidad lesionada por parte de las autoridades peruanas durante el tiempo en que estuvieron detenidos, y por tanto no se generó responsabilidad estatal.<sup>34</sup> Esta última conclusión es análoga a la hallada en el *Caso Gangaram Panday*<sup>35</sup> y en el *Caso Caballero Delgado y Santana*.<sup>36</sup>

#### G. ALLANAMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO ANTE LA CORTE POR VIOLACIONES AL DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL

Hacia mediados de 1998 la Corte Interamericana había conocido algunos casos en los cuales el Estado había comunicado su allanamiento.<sup>37</sup> El *Caso Benavides Cevallos* fue, sin embargo, la ocasión en que la Corte estableció por vez primera de manera

---

33. Ver *Caso Velásquez Rodríguez*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 4, ¶ 187 (notando, además, que el aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva constituyen tratos crueles e inhumanos, y violan los párrafos 1 y 2 del artículo 5 de la CADH); ver también *Caso Godínez Cruz*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 5, ¶ 197.

34. Ver *Caso Neira Alegría et al.*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 20, ¶ 86 (considerando que el sentido del artículo 5 de la CADH no contempla la privación de la vida dentro de las acciones que constituyen torturas, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes).

35. Ver *Caso Gangaram Panday*, Sentencia del 21 de enero de 1994, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 16, ¶ 56 (1994) (declarando que la Corte no puede inferir el empleo de torturas en la totalidad de los hechos).

36. Ver *Caso Caballero Delgado y Santana*, Sentencia del 8 de diciembre de 1995, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 22, ¶ 65 (1995) (notando falta de pruebas para encontrar violaciones de tortura o malos tratos).

37. Ver *Caso Maqueda*, Resolución del 17 de Enero de 1995, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 18 (1995); ver también *Caso El Amparo*, Sentencia de 18 de enero de 1995, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 19 (1995); *Caso Garrido y Baigorria*, Sentencia del 2 de febrero de 1996, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 26 (1996); *Caso Aloeboetoe y Otros*, Sentencia del 4 de diciembre de 1991, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 11 (1991) (invocando los artículos 51 y 61 de la CADH y el artículo 50 de su Reglamento).

expresa que el Estado había violado artículos de la Convención Americana *inter alia* el artículo 5, por la comisión de los actos materia de allanamiento.<sup>38</sup> La Corte continuaría con este procedimiento en los casos subsiguientes.<sup>39</sup>

## II. APLICACIÓN DE LA NOCIÓN DE TORTURA Y TRATOS CRUELES, INHUMANOS Y DEGRADANTES

### A. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR LAS CONDICIONES DE DETENCIÓN DE LOS RECLUSOS

La Corte Interamericana ha enfatizado que el artículo 5 de la CADH consagra el derecho de toda persona privada de libertad a vivir en condiciones no lesivas a su dignidad.<sup>40</sup> Asimismo, ha señalado que el Estado es el responsable de los establecimientos de detención, dentro de los cuales debe garantizar a los reclusos

---

38. *Ver Caso Benavides Cevallos*, Sentencia del 19 de junio de 1998, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 38, Punto Resolutivo 2 (1998) (declarando que el Estado de Ecuador “violó los derechos protegidos por los artículos 3, 4, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en concordancia con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de la señorita Consuelo Benavides Cevallos”).

39. *Ver Caso del Caracazo*, Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 58, Punto Resolutivo 2 (1999); *ver también Caso Trujillo Oroza*, Sentencia del 26 de enero de 2000, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 64, Punto Resolutivo 2 (2000); *Caso Barrios Altos*, Sentencia de 14 de marzo de 2001, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 75, Punto Decisivo 2(b) (2001); *Caso Bulacio*, Sentencia de 18 del septiembre de 2003, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 100, Punto Declarativo 3 (2003); *Caso de la Masacre Plan del Sánchez*, Sentencia del 29 de abril de 2004, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 105, Punto Resolutivo 3 (2004); *Caso Molina Theissen*, Sentencia del 4 de mayo de 2004, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 106, Puntos Resolutivos 3-4 (2004); *Caso Carpio Nicolle*, Sentencia del 22 de noviembre de 2004, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 117, Punto Declarativo 1(b) (2004).

40. *Ver Caso De la Cruz Flores*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 115, ¶ 124; *ver también Caso Tibi*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 114, ¶ 150 (expresando que el hacinamiento o aislamiento en celda reducida, con restricciones indebidas al régimen de visitas y con falta de ventilación, luz natural, y condiciones adecuadas para la higiene y el reposo, constituyen una violación a la integridad personal); Instituto de Reeducción del Menor v. Paraguay, Sentencia del 2 de septiembre del 2004, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 112, ¶ 151 (2004); *Caso Bulacio*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 100, ¶ 126; *Cantoral Benavides v. Perú*, Sentencia del 18 de agosto del 2000, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 69, ¶ 87 (2000).

condiciones de vida compatibles con sus derechos fundamentales y dignidad personal.<sup>41</sup>

En caso de las detenciones ilegales, la Corte ha establecido que una persona que ha sido detenida de manera ilegal, se halla en una situación de extrema vulnerabilidad, en la cual existe el riesgo de que otros derechos le sean violados, por ejemplo, el derecho a la integridad física y un trato que respete su dignidad personal.<sup>42</sup> La Corte ha señalado que una detención ilegal, por breve que sea, se halla dentro de los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y puede devenir una violación a la integridad psíquica y moral.<sup>43</sup>

---

41. Ver *Caso Berenson*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 119, ¶ 102; ver también *Caso De la Cruz Flores*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 115, ¶ 124; *Caso Tibi*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 114, ¶ 150; *Caso Instituto de Reeducción del Menor*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 112, ¶ 126 (caracterizando al Estado como fiador de derechos fundamentales de personas privadas de libertad); *Caso Bulacio*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 100, ¶ 126 (añadiendo que el Estado, como fiador de derechos, debe explicar lo que suceda a las personas bajo su custodia); *Caso Hilaire*, Sentencia del 21 de junio de 2002, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 94, ¶ 165; *Caso Cantoral Benavides*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 69, ¶ 87; *Castillo Petrucci et al. v. Perú*, Sentencia del 30 de mayo de 1999, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 52 (1999), ¶ 195; *Caso Alegría*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 20, ¶ 60.

42. Ver *Caso Tibi*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 114, ¶ 147 (reconociendo que las amenazas y el peligro real de lesiones físicas contra el detenido constituyen tortura psicológica); ver también *Hermanos Gómez Paquiyauri v. Perú*, Sentencia del 8 de julio del 2004, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 110, ¶ 108 (2004); *Maritza Urrutia v. Guatemala*, Sentencia del 27 de noviembre del 2003, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 103, ¶ 96 (2003); *Caso Velásquez*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 70, ¶ 150; *Caso Cantoral Benavides*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 69, ¶ 90; *Caso de los Niños de la Calle*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 63, ¶ 164; *Caso Loayza Tamayo*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 33, ¶ 57; *Caso Suárez Rosero*, Sentencia del 12 de noviembre de 1997, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 35, ¶ 90; cf. *Ireland v. United Kingdom*, 25 Eur. Ct. H.R. (Ser. A) en 66 (1978).

43. Ver *Caso Hermanos Gómez Paquiyauri*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 110, ¶ 108 (expresando que a las víctimas, además de ser ilegal y arbitrariamente detenidas, se les negaron los derechos del artículo 7 de la CADH); ver también *Caso Maritza Urrutia*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 103, ¶ 87; *Caso Sánchez*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 99, ¶ 98 (señalando que la detención ilegal permite inferir “que el trato que la víctima recibió durante su incomunicación fue inhumano, degradante y agresivo en extremo”); *Bámaca Velásquez v. Guatemala*, Sentencia del 25 de noviembre del 2000, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 70 (2000), ¶ 128 (aseverando que la desaparición forzada o involuntaria viola de forma continuada varios derechos de la Convención, ya que además de constituir una privación arbitraria de la libertad de la víctima pone a la misma en una situación de

La Corte ha tenido ocasión de conocer varios casos en los cuales la responsabilidad del Estado se ha visto comprometida por actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos en circunstancias de detención. Así, por ejemplo, la Corte ha declarado en varias oportunidades que en situaciones de hacinamiento, incomunicación con restricciones arbitrarias al régimen de visitas, aislamiento en celda reducida, con falta de ventilación, luz natural, cama para el reposo, ni condiciones adecuadas de higiene, la Corte encuentra violación al derecho de la integridad personal.<sup>44</sup>

En el *Caso De la Cruz Flores*, la Corte concluyó que las circunstancias que padeció la víctima, entre ellas vivir en condiciones insalubres, no cambiarse de ropa en un mes, con restricciones de salida al patio por solo treinta minutos al día, limitadas posibilidades de lectura y un régimen de visitas restringido, constituían tratos crueles, inhumanos y degradantes.<sup>45</sup> En el *Caso Maritza Urrutia*, la Corte probó que la presunta víctima fue encapuchada, esposada a una cama, con la luz encendida y la radio a todo volumen, lo que le impedía dormir y además sometida a interrogatorios en extremo prolongados y a fotografías de personas que presentaban signos de tortura o que habían muerto en combate, amenazándola con que así la encontraría su familia. Maritza Urrutia fue también amenazada de muerte junto a los miembros de su familia, después de sufrir torturas físicas. Finalmente, Maritza Urrutia fue forzada a filmar un video, luego transmitido por dos

---

indefensión total donde su dignidad personal, seguridad, y vida corren peligro); *Caso Cantoral Benavides*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 69, ¶¶ 82-83.

44. Ver *Caso Berenson*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 119, ¶ 102; ver también *Caso Tibi*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 114, ¶ 150; *Caso Instituto de Reeducación del Menor*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 112, ¶¶ 151-52 (reconociendo que las condiciones características de la privación de libertad, donde el Estado puede regular los derechos y las obligaciones de los reclusos, los cuales carecen de habilidad para satisfacer por cuenta propia necesidades básicas, generan una relación especial entre reclusos y el Estado, en la cual el Estado debe garantizar condiciones de vida necesarias para el desarrollo de una vida digna); *Caso Hilaire*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 94, ¶ 164; *Caso Cantoral Benavides*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 69, ¶ 89.

45. Ver *Caso De la Cruz Flores*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 115, ¶ 130 (aseverando que la sola privación de todo contacto con el mundo exterior a la cual la presunta víctima fue sometida por un mes permite a la Corte concluir tratos crueles, inhumanos y degradantes).



televisoras guatemaltecas, dando declaraciones en contra de su voluntad, y cuyo contenido fue obligada a ratificar en una conferencia de prensa sostenida después de su liberación.<sup>46</sup> Consecuentemente, la Corte concluyó que el Estado guatemalteco violó el artículo 5 de la CADH.<sup>47</sup>

En el *Caso Tibi*, la víctima, mientras guardaba prisión fue objeto de, al menos, siete sesiones de violencia física por parte de los guardias de la cárcel, con el fin de obtener su autoinculpación. En tales sesiones, Tibi recibió golpes de puño en la cara y el cuerpo, quemaduras en las piernas con cigarrillos, descargas eléctricas en los genitales, golpes con un objeto contundente, y se le sumergió su cabeza en el agua. Los actos descritos produjeron en Tibi grave sufrimiento físico y mental y tenían como objeto la disminución de sus capacidades físicas y mentales y la anulación de su personalidad a efectos de lograr que se autoinculpe por la comisión de un delito. La Corte concluyó que tales hechos constituyeron tortura, en los términos del artículo 5.2 de la CADH.<sup>48</sup> En el *Caso Suárez Rosero*, la Corte expresó que las alegaciones de Suárez Rosero de haber sido mantenido en una celda húmeda y subterránea de aproximadamente quince metros cuadrados, con otros dieciséis reclusos, sin condiciones apropiadas de higiene, obligado a dormir sobre hojas de periódico y sometido a golpes y amenazas durante su detención, constituía también tratamiento cruel, inhumano y degradante en contra de éste.<sup>49</sup>

En el *Caso de los Gómez Paquiyauri*, las presuntas víctimas en el período durante su detención y previo a su muerte, fueron objeto de maltratos físicos y psicológicos tales como ser arrojados al suelo, pateados, aplastados por el peso de un policía sobre sus espaldas y

---

46. Ver *Caso Maritza Urrutia*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 103, ¶ 85 (notando, además, que la detención de Maritza Urrutia fue ilegal y arbitraria).

47. Ver *id.* en Punto Declarativo 2.

48. Ver *Caso Tibi*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 114, ¶¶ 148-49 (expresando que la víctima también sufrió amenazas y hostigamientos que le produjeron pánico y temor por su vida).

49. Ver *Caso Suárez Rosero*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 35, ¶ 91 (notando además que la víctima declaró ante la Corte sobre los sufrimientos que le produjo verse impedido de la posibilidad de contactar a un abogado y ver o comunicarse con su familia).

encapuchados por otros policías. Las presuntas víctimas fueron, además, golpeados a culatazos de escopeta y luego asesinados. Sus cuerpos presentaban evidencias de múltiples lesiones y heridas de bala, lo que indica que fueron sometidos a golpes y disparos mas allá de los necesarios para causarles la muerte, si ese hubiera sido el sólo propósito de los agentes de la Policía Nacional del Perú.<sup>50</sup> La Corte, lógicamente, concluyó que el Estado había violado el derecho a la integridad personal de las víctimas.<sup>51</sup>

En el *Caso Loayza Tamayo*, la Corte encontró que la incomunicación durante la detención, la exhibición publica en los medios de comunicación con un “traje infamante,” el aislamiento en celda pequeña, sin ventilación ni luz natural, los golpes y maltratos como el ahogamiento, la intimidación y amenazas de violencia y las restricciones al régimen de visitas tenían fundamento en elementos graves y concluyentes que validaban la presunción de una práctica de tratos crueles, inhumanos y degradantes por la comisión de tales actos.<sup>52</sup> Idéntica valoración merecieron hechos similares sucedidos en el *Caso Cantoral Benavides*.<sup>53</sup>

## B. CONDICIONES DE CIERTAS PRISIONES ANALIZADAS POR LA CORTE INTERAMERICANAS

La Corte también ha hecho referencia a condiciones específicas de detención en las cárceles. Así, en el caso de Lori Berenson Mejía se hizo relación al penal de Yanamayo, para el cual, la Corte recordó las investigaciones que en ese lugar realizó el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, en las cuales esa entidad concluyó que en el penal sucedían tratos y penas crueles e inhumanas, y que debería ser

---

50. *Ver Caso Hermanos Gómez Paquiyauri*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 110, ¶ 110.

51. *Ver id.* en Punto Declarativo 3.

52. *Ver Caso Loayza Tamayo*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 33, ¶ 58 (notando, sin embargo, falta de evidencias probatorias de violación sexual).

53. *Ver Caso Cantoral Benavides*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 69, ¶ 85 (documentando los tratos recibidos por la víctima, que incluyen aislamiento riguroso durante un año, hacinamiento sin ventilación ni luz natural, visitas restringidas, atención médica deficiente y exhibición pública en ropas infamantes).

clausurado por el Estado.<sup>54</sup> En el *Caso Tibi*, la Corte Interamericana hizo referencia a la Penitenciaría del Litoral, *circa* Guayaquil, Ecuador, también conocida como la “cuarentena,” la cual carecía de un sistema de clasificación de los detenidos. Debido a esto, la víctima, Daniel Tibi, estuvo expuesta a la convivencia con sentenciados y, por ende, a una mayor violencia. La Corte concluyó que tales hechos eran violatorios al artículo 5.4 de la CADH.<sup>55</sup>

El expediente en el cual la Corte ha analizado con mayor énfasis la situación carcelaria ha sido el *Caso “Instituto de Reeducción del Menor.”*<sup>56</sup> La Corte concluyó que el Instituto no contaba con una infraestructura adecuada para albergar a los internos, que había una sobrepoblación carcelaria y, como consecuencia, los internos se hallaban permanentemente hacinados. Los internos estaban reclusos en celdas insalubres, con escasas instalaciones higiénicas y muchos de estos internos no tenían camas, frazadas ni colchones, lo cual los obligaba a dormir en el suelo, o hacer turnos con sus compañeros.<sup>57</sup> Asimismo, los internos se encontraban mal nutridos, con pocas oportunidades de hacer ejercicio o realizar actividades recreativas, y carecían de una atención médica, dental y psicológica adecuada y oportuna.<sup>58</sup> Así también, el Instituto aplicaba el aislamiento, los maltratos y la incomunicación como métodos de castigo, con el propósito de disciplinar a la población de internos.<sup>59</sup> Ha quedado establecido además que los internos procesados estaban junto a los

---

54. *Ver Caso Berenson*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 119, ¶ 107; *cf.* Informe del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, ¶¶ 144-93, U.N. Doc. A/56/44 (2001).

55. *Ver Tibi v. Ecuador*, Sentencia del 7 de septiembre del 2004, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 114, ¶ 158 (2004) (señalando que el artículo 5.4 de la CADH requiere que, “salvo en circunstancias excepcionales,” los procesados deben estar separados de los sentenciados y deben recibir un tratamiento adecuado a su condición).

56. *Ver Instituto de Reeducción del Menor v. Paraguay*, Sentencia del 2 de septiembre del 2004, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 112, ¶ 165 (2004).

57. *Id.*

58. *Id.* ¶ 166.

59. *Ver id.* ¶¶ 167-68 (explicando que aunque no hay evidencia que todos los internos fueron objeto de tales castigos, “la amenaza de dichos castigos era real e inminente, creando un clima de permanente tensión y violencia” lesivo al desarrollo psíquico y a la dignidad e integridad personal de los internos, lo que constituye una violación del artículo 5 de la CADH).

condenados y, por tanto, todos los internos recibían el mismo trato sin distinción alguna. Esta situación generó en el Instituto un clima de inseguridad, tensión y violencia. El propio Estado ha reconocido que la misma se debía a la falta de disponibilidad de medios.<sup>60</sup> Finalmente, no existían oportunidades efectivas para que los internos se reformaran y reinsertaran a la sociedad. Estas circunstancias, atribuibles al Estado, violan el artículo 5 de la CADH respecto de todos los internos que permanecieron en el Instituto.<sup>61</sup>

### *1. La Incomunicación Coactiva*

La Corte ha declarado que la incomunicación coactiva constituye un trato cruel, inhumano, lesivo de la integridad psíquica y moral de la persona y del derecho al respeto a la dignidad inherente al ser humano,<sup>62</sup> puesto que tal incomunicación produce en el detenido sufrimientos morales y perturbaciones psíquicas y lo coloca en una situación de particular vulnerabilidad.<sup>63</sup> Por tales razones, la Corte ha

---

60. *Id.* ¶ 169.

61. *Ver id.* ¶¶ 170-71 (notando que las condiciones inhumanas y degradantes en el Instituto producían “un clima de violencia, inseguridad, abusos, corrupción, desconfianza y promiscuidad, donde se imponía la ley del mas fuerte con todas sus consecuencias”).

62. *Ver Caso Berenson*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 119, ¶ 103; *ver también Caso De la Cruz Flores*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 115, ¶ 128; *Maritza Urrutia v. Guatemala*, Sentencia del 27 de noviembre del 2003, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 103, ¶ 87 (2003) (explicando que esta incomunicación produce en el detenido sufrimientos morales y perturbaciones psíquicas y lo coloca en una situación de particular vulnerabilidad); *Bámaca Velásquez v. Guatemala*, Sentencia del 25 de noviembre del 2000, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 70, ¶ 150 (2000); *Cantoral Benavides v. Perú*, Sentencia del 18 de agosto del 2000, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 69, ¶ 83 (2000); *Caso Suárez Rosero*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 35, ¶ 90 (añadiendo que el aislamiento del mundo exterior incrementa el peligro de agresión y arbitrariedad en las cárceles); *Caso Fairen Garbi y Solís Corrales*, Sentencia del 15 de marzo de 1989, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 6, ¶ 149 (1989) (indicando que la incomunicación coactiva de por sí viola el artículo 5 de la CADH); *Caso Cruz*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 4, ¶ 164 (señalando que el artículo 5 de la CADH establece lo siguiente: “toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral y nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes y que toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”); *Caso Velásquez Rodríguez*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 5, ¶ 156.

63. *Ver Caso Maritza Urrutia*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 103, ¶ 87; *ver también Bámaca Velásquez v. Guatemala*, Sentencia del 25 de noviembre del 2000, Corte

declarado que el Estado solo puede utilizar la incomunicación de una manera excepcional.<sup>64</sup> En el *Caso Suárez Rosero*, la Corte estableció que tal medida puede ser aplicada solo si es decretada de acuerdo con las condiciones establecidas de antemano por la ley, entendida ésta en el sentido del artículo 30 de la CADH.<sup>65</sup>

La Corte ha declarado la violación por este concepto en varias ocasiones. En un caso declaró la existencia de tratos crueles, inhumanos y degradantes por la constatación de que la víctima fue privada durante de un mes de toda comunicación con el mundo exterior,<sup>66</sup> en otros casos fueron periodos de treinta y seis días<sup>67</sup> y treinta y siete días.<sup>68</sup> En el *Caso Cantoral Benavides*, la Corte declaró que la violación se cometió durante los primeros ocho días de detención en los cuales se mantuvo incomunicada a la víctima.<sup>69</sup>

## 2. Aislamiento Prolongado y Atención Médica

En reiteradas ocasiones la Corte ha señalado que el aislamiento prolongado es un tratamiento cruel, inhumano y lesivo de la integridad psíquica y moral de la persona y una violación del derecho

---

I.D.H. (Ser. C) No. 70 (2000); *Caso Cantoral Benavides*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 69, ¶ 84; *Castillo Petruzzi et al. v. Perú*, Sentencia del 30 de mayo de 1999, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 52, ¶ 195 (1999).

64. *Ver Caso Berenson*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 119, ¶ 104; *ver tambien Caso De la Cruz Flores*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 115, ¶ 127; *Caso Maritza Urrutia*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 103, ¶ 87; *Bámaca Velásquez v. Guatemala*, Sentencia del 25 de noviembre del 2000, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 70, ¶ 150 (2000); *Caso Cantoral Benavides*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 69, ¶ 84; *Caso Castillo Petruzzi et al.*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 52, ¶ 195; *Caso Suárez Rosero*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 35, ¶ 90.

65. *Ver Caso Suárez Rosero*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 35, ¶ 89 (señalando que tal medida existe en la Constitución Política del Ecuador, la cual dispone que “en cualquiera de los casos [el detenido] no podrá ser incomunicado por más de 24 horas”).

66. *Ver Caso De la Cruz Flores*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 115, ¶ 130 (notando también que la víctima estuvo en aislamiento durante un año y solo podía salir al patio por treinta minutos al día).

67. *Caso Suárez Rosero*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 35, ¶ 91.

68. *Caso Castillo Petruzzi et al.*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 52, ¶ 192.

69. *Caso Cantoral Benavides*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 69, ¶ 81.

al respeto a la dignidad humana.<sup>70</sup> En dos de los casos, las víctimas fueron sometidas a “aislamiento celular” por aplicación de la sentencia dictada en su contra.<sup>71</sup> En estos casos, la Corte concluyó que tales condiciones de detención no se ajustaban a lo prescrito en la CADH.<sup>72</sup>

La Corte ha expresado que, cuando el detenido así lo requiera, el Estado tiene la obligación de proporcionar servicios médicos que incluyan: “revisión médica regular y atención y tratamientos adecuados.”<sup>73</sup> Asimismo, “el Estado debe permitir y facilitar que los detenidos sean atendidos por un facultativo que ellos elijan o elegido por quienes ejercen su representación o custodia legal.”<sup>74</sup> Tales consideraciones tienen fundamento en las resoluciones emanadas de las Naciones Unidas con relación a asuntos carcelarios<sup>75</sup> y en

---

70. Ver *Caso Velásquez Rodríguez*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 5, ¶ 156; ver también *Caso Berenson*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 119, ¶ 103; *Caso De la Cruz Flores*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 115, ¶ 128; *Caso Maritza Urrutia*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 103, ¶ 87; *Caso Bámaca Velásquez*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 70, ¶ 150; *Caso Cantoral Benavides*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 69, ¶ 83; *Caso Castillo Petrucci et al.*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 52, ¶ 194; *Caso Godínez Cruz*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 4, ¶ 164; *Caso Garbí y Corrales*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 6, ¶ 149.

71. Ver *Caso Cantoral Benavides*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 69, ¶ 88; ver también *Caso Loayza Tamayo*, 1996 Corte I.D.H. (Ser. C) No. 33, en Punto Resolutivo 1 (Medidas Provisionales del 13 de septiembre de 1996).

72. *Caso Cantoral Benavides*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 69, ¶ 88; ver también *Caso Loayza Tamayo*, 1996 Corte I.D.H. (Ser. C) No. 33, en Punto Resolutivo 1; *Caso Loayza Tamayo*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 33, ¶ 58 (resolviendo que la situación de los detenidos debía ser adecuada a la CADH).

73. Ver *Caso De la Cruz Flores*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 115, ¶ 132; ver también *Tibi v. Ecuador*, Sentencia del 7 de septiembre del 2004, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 114, ¶ 156 (2004).

74. Ver *Caso De la Cruz Flores*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 115, ¶ 132; ver también *Caso Tibi*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 114, ¶ 156; *Caso Bulacio*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 100, ¶ 131.

75. Ver A.G. Res. 43/173, ¶ 24, U.N. Doc. A/RES/43/173 (9 de diciembre de 1988) (“Principio 24: Se ofrecerá a toda persona detenida o presa un examen médico apropiado con la menor dilación posible después de su ingreso en el lugar de detención o prisión y, posteriormente, esas personas recibirán atención y tratamiento médico cada vez que sea necesario . . . [e]sa atención y ese tratamiento serán gratuitos.”).

jurisprudencia de la Corte Europea.<sup>76</sup> En el *Caso De la Cruz Flores* fue probado que la víctima, durante el tiempo de su detención, había padecido diversas dolencias físicas y que la atención que había recibido al respecto había sido inadecuada.<sup>77</sup> La Corte sostuvo que semejante tratamiento “no satisfacía los requerimientos materiales mínimos de un trato digno.”<sup>78</sup> En el *Caso Tibi*, la víctima recibió revisión médica en dos ocasiones en que se verificaron heridas y traumas; sin embargo, la Corte declaró que existía una violación del artículo 5 de la CADH por no proporcionarle el tratamiento médico adecuado o suficiente.<sup>79</sup>

Así también, basada en una comunicación del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Corte ha señalado que la detención de una persona junto a otras, en circunstancias que “representan un peligro serio para la salud,” es una violación del derecho a la integridad personal.<sup>80</sup>

Los criterios vertidos en los *Casos De la Cruz Flores y Tibi* constituyen una evolución de la jurisprudencia de la Corte, pues contrastan con la opinión vertida por ésta en el *Caso Cesti Hurtado*. En éste último caso, la Comisión Interamericana argumentó que el Estado, al no permitirle al señor Gustavo Adolfo Cesti Hurtado ser tratado por un médico de su confianza, había violado el artículo 5 de la CADH.<sup>81</sup> La Corte, sin embargo, falló que Cesti Hurtado había recibido atención médica oportuna y adecuada en el Hospital Militar, en el cual se le habían realizado todos los estudios especializados en razón de sus problemas cardíacos<sup>82</sup> y, por ende, desestimó que el

---

76. *Ver* Kudla v. Poland, 2000-XI Eur. Ct. H.R. 197, 224 (describiendo las condiciones mínimas necesarias para asegurar la salud y el bienestar de los prisioneros).

77. *Caso De la Cruz Flores*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 115, ¶ 131.

78. *Id.*

79. *Caso Tibi*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 114, ¶¶ 153, 157.

80. *Ver* *Caso Hilaire*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 94, ¶ 166; *ver también* *Caso Cantoral Benavides*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 69, ¶ 86; Sonia Hernández Valentín de Bazano v. Uruguay, Informe del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Supp. No. 5, ¶¶ 9-10, U.N. Doc. AT/AGO/5 (1977).

81. *Ver* *Caso Cesti Hurtado*, Sentencia de 29 de septiembre de 1999, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 59, ¶¶ 153, 156 (1999).

82. *Ver id.* ¶ 157.

Estado haya violado los derechos consagrados en el artículo 5.2 de la CADH.<sup>83</sup>

### C. RESPONSABILIDAD ESTATAL POR VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL A MENORES DE EDAD

En el *Caso Instituto de Reeducción del Menor*, la Corte, al referirse al artículo 5.5 de la CADH, señaló que se había probado que en varias ocasiones algunos menores fueron trasladados a la penitenciaría de adultos, donde menores y adultos compartían espacio físico.<sup>84</sup> La Corte reconoció que tal situación exponía a los menores a circunstancias que comprometen su desarrollo y los hace vulnerables a abusos de los adultos.<sup>85</sup> Al respecto, la Corte concluyó que el Estado había fallado en cumplir de manera efectiva su función de garante en la relación “Estado adulto/niño privado de libertad,” en la medida en que “no tomó las medidas positivas necesarias para garantizar condiciones de vida digna a todos los detenidos y tomar las medidas especiales que eran requeridas para los niños,” y por ende violó *inter alia* los artículos 5.1, 5.2 y 5.6 de la CADH en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, todos ellos leídos a la luz del artículo 19 de la CADH.<sup>86</sup>

En el *Caso Instituto de Reeducción del Menor*, a pesar que para la Corte era claro que el Estado no había cumplido con las disposiciones de los numerales 4 y 5 del artículo 5 de la CADH, aquella no se pronunció sobre los casos particulares de las víctimas por falta de información al respecto.<sup>87</sup> Sin perjuicio de ello, la Corte advirtió con preocupación este incumplimiento e instó *in genere* a corregir la situación de manera inmediata.<sup>88</sup>

---

83. *Ver id.* ¶ 160.

84. *Ver* Instituto de Reeducción del Menor v. Paraguay, Sentencia del 2 de septiembre del 2004, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 112, ¶ 175 (2004).

85. *Id.*

86. *Id.* ¶ 176.

87. *Id.* ¶ 189.

88. *Id.*



D. INTRODUCCIÓN DE LA VÍCTIMA EN EL MALETERO DE  
UN VEHÍCULO Y EL FENÓMENO DEL CORREDOR  
DE LA MUERTE (*DEATH ROW PHENOMENON*)

En el *Caso Castillo Páez*, la Corte reconoció que se dio una violación del artículo 5 de la CADH cuando Ernesto Rafael Castillo Páez fue introducido en el maletero de un vehículo oficial al momento de su detención.<sup>89</sup> Tal situación se ha repetido en otros casos que han merecido idéntica conclusión.<sup>90</sup>

Las Cortes Interamericana e Europea han definido el “fenómeno de corredor de la muerte” como el “período de detención prolongado en espera y previo a una ejecución., durante el cual [el acusado] sufre angustia.”<sup>91</sup> Las Cortes también incluyeron una lista de otras circunstancias que pueden estar envueltas en el fenómeno:

La forma en que se impuso la condena; la no consideración de las características personales del acusado; la desproporción entre la pena y el delito cometido; las condiciones de detención a la espera de ejecución; las demoras en las apelaciones o en la revisión de la pena de muerte durante las cuales la persona está sujeta a una tensión extrema y a trauma psicológico; el hecho de que el juez no tome en consideración la edad o el estado mental de la persona condenada; así como la constante espera de lo que será el ritual de su propia ejecución.<sup>92</sup>

En el *Caso Hilaire*, los detenidos se encontraban bajo la constante amenaza de ser ahorcados, luego de haber sido sujetos a un proceso

---

89. *Ver Caso Castillo Páez*, Sentencia del 3 de noviembre de 1997, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 34, ¶¶ 66-67 (1997) (aceptando la prueba testimonial de las circunstancias de la detención).

90. *Ver por ejemplo Caso de los Niños de la Calle*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 63, ¶ 164; *ver también* *Hermanos Gómez Paquiyauri v. Perú*, Sentencia del 8 de julio del 2004, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 110, ¶ 109 (2004).

91. *Ver Caso Hilaire*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 94, ¶ 167; *ver también* *Soering v. United Kingdom*, 161 Eur. Ct. H.R. (ser. A) en 44-45 (1989).

92. *Ver Caso Hilaire*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 94, ¶ 167; *ver también* *Caso Soering*, 161 Eur. Ct. H.R. en 44-45; *Furman v. Georgia*, 408 U.S. 238, 287-88 (1972) (reconociendo que el período de espera en lo que se lleva a cabo una sentencia de ejecución destruye al espíritu humano y constituye una tortura psicológica que muchas veces conduce a la locura).

judicial violatorio a la Convención Americana.<sup>93</sup> En este caso y de acuerdo a los informes periciales, el “fenómeno del corredor de la muerte” produjo terror y depresión en los prisioneros, varios de los cuales no podían dormir o comer.<sup>94</sup> La Corte concluyó que tales condiciones de detención constituían “tratos crueles, inhumanos o degradantes, [pues] afectan a su integridad física y psíquica.”<sup>95</sup>

E. CONSECUENCIAS DE UN INCENDIO EN UN LUGAR PROTEGIDO POR EL ESTADO, PRESENTACIÓN INFAMANTE DE LAS VÍCTIMAS EN SITUACIONES DE CARÁCTER PÚBLICO, Y LA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 5 EN PERJUICIO DE LOS FAMILIARES DE LA VÍCTIMA

En el *Caso Instituto de Reeducción del Menor*, los heridos que lograron sobrevivir de los incendios experimentaron un “intenso sufrimiento moral y físico y, además, algunos de ellos continuaron padeciendo secuelas corporales y/o psicológicas.”<sup>96</sup> En este caso, se atribuye la responsabilidad del incendio al Estado ya que éste no tomó las medidas preventivas necesarias.<sup>97</sup> Las quemaduras, heridas e intoxicaciones de humo ocurridas bajo la custodia y supuesta protección del Estado, y las secuelas de las mismas, constituyen tratos en violación de los artículos 5.1 y 5.2 de la CADH.<sup>98</sup>

En el *Caso Petruzzi*, la Corte declaró que presentar a las detenidas vendadas, encapuchadas, amarrocada o engrilletadas a diligencias ante autoridades judiciales constituye una violación del artículo 5.2 de la CADH.<sup>99</sup> Este fue un hecho no controvertido por el Estado.<sup>100</sup>

La Corte ha señalado en varias oportunidades “que los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos pueden ser, a

---

93. *Caso Hilaire*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 94, ¶ 168.

94. *Id.*

95. *Id.* ¶ 169.

96. *Id.* ¶ 188.

97. *Ver id.* ¶¶ 178-79 (señalando que el centro fue originalmente pensado como un centro de reclusión por lo que no cuenta con medidas de seguridad, evacuación y emergencia necesarias para caso de incendio).

98. *Id.* ¶ 188.

99. *Castillo Petruzzi et al. v. Perú*, Sentencia del 30 de mayo de 1999, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 52, ¶ 192 (1999).

100. *Id.*

su vez, víctimas.”<sup>101</sup> Esta ampliación de la interpretación del artículo 5 de la CADH fue utilizada por primera vez en el *Caso Blake*.<sup>102</sup> Al respecto, la Corte indicó que la desaparición forzada de Nicholas Chapman Blake implicaba necesariamente una violación de la integridad física y moral de sus familiares, debido al sentimiento de “sufrimiento y angustia” que tal situación produce, además del “sentimiento de inseguridad, frustración e impotencia ante la abstención de las autoridades públicas de investigar los hechos.”<sup>103</sup>

Adicionalmente, la Corte señaló que al incinerar los restos del señor Blake, con el propósito de dificultar su búsqueda, el Estado violó los valores culturales tradicionales de la sociedad guatemalteca respecto al trato a los muertos incrementando el sufrimiento de la familia Blake.<sup>104</sup> La Corte llegó a una conclusión similar en el *Caso de los Niños de la Calle*. En este caso, los restos de los jóvenes fueron abandonados en los bosques de San Nicolás, “en un paraje deshabitado, expuestos a las inclemencias del tiempo y la acción de los animales.”<sup>105</sup> La Corte consideró que este manejo irrespetuoso de los cuerpos de las víctimas constituyó un trato cruel e inhumano para los familiares de las mismas, por considerarse los cuerpos sagrados.<sup>106</sup>

---

101. *Ver* Maritza Urrutia v. Guatemala, Sentencia del 27 de noviembre del 2003, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 103, ¶ 101 (2003); *ver también* Bámaca Velásquez v. Guatemala, Sentencia del 25 de noviembre del 2000, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 70, ¶ 160 (2000); *Caso de los Niños de la Calle*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 63, ¶ 176.

102. *Ver* *Caso Blake*, Corte I.D.H. (Ser. C), No. 36, ¶¶ 110, 116 (explicando que la Comisión Interamericana había alegado que la desaparición forzada había afectado “la integridad personal del Señor Nicholas Blake” y la Corte omitió consideraciones al respecto).

103. *Ver id.* ¶¶ 113-14 (señalando que el hermano de la víctima, Samuel Blake, manifestó en audiencia pública que padecía depresión desde la muerte de su hermano, que le cuesta sobrellevar la situación tanto a él, como a su familia, y que en razón de lo dicho, él ha gastado gran cantidad de dinero en consulta con psiquiatras y medicinas).

104. *Id.* ¶ 115.

105. *Caso de los Niños de la Calle*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 63, ¶ 174.

106. *Ver id.* ¶ 171 (aplicando, tanto en el *Caso Blake* como en el *Caso de los Niños de la Calle*, el principio *iura novit curia* para dar a conocer este punto). Este principio también lo aplicó la Corte en relación con el artículo 5 de la CADH en el *Caso Durand y Ugarte* y en el *Caso Hilaire*.

Un caso en buena medida paradigmático sobre responsabilidad del Estado por violación del derecho a la integridad física de los familiares de la víctima es el *Caso de Myrna Mack Chang*. En éste caso, la violación surgió como consecuencia directa de las amenazas y hostigamientos sufridos por los familiares desde el inicio de la investigación de la ejecución extrajudicial de Myrna Mack Chang. Esta situación se ha visto agravada por el patrón de obstrucciones de las investigaciones anteriormente reseñadas, el asesinato de un policía investigador, las amenazas y hostigamientos sufridos por algunos de los operadores de justicia, policías y testigos, ante lo cual se vieron forzados a exiliarse. La Corte ha señalado en todos los casos mencionados que dichas circunstancias, exacerbadas aún más por el largo tiempo transcurrido sin que se hayan esclarecido los hechos, provocaron en los familiares de la víctima una constante angustia, sentimientos de frustración e impotencia y un temor profundo de verse expuestos al mismo patrón de violencia impulsado por el Estado.<sup>107</sup> En razón de ello, los familiares de Myrna Mack Chang deben ser considerados como víctimas porque el Estado les ha vulnerado su integridad psíquica y moral.<sup>108</sup>

## CONCLUSIÓN

Los actos detallados en este artículo constituyen, en su gran mayoría, actos de una extrema crueldad, que preocupan a cualquier persona con mediana sensibilidad. El propósito del presente artículo ha sido exponerlos con un cierto detalle para que a través de su conocimiento se generen herramientas útiles que permitan, con un esfuerzo conjunto entre sociedad civil y Estado, erradicar tales atrocidades: que la prohibición de la tortura se consolide, entonces, no tan solo como un postulado teórico de un grupo de voluntariosos

---

107. Ver *Caso Maritza Urrutia*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 97, ¶ 232; ver también *Caso Sánchez*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 99, ¶ 101; *Caso Bámaca Velásquez*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 70, ¶ 160; *Caso Blake*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 36, ¶ 114.

108. Ver *Caso Maritza Urrutia*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 97, ¶ 97; ver también *Caso de la Masacre Plan del Sánchez*, Sentencia de 29 de abril de 2004, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 105, ¶ 101 (2004); *Caso Bámaca Velásquez*, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 70, ¶ 160; cf. *Caso Kurt v. Turquía*, 1998-III Eur. Ct. H.R. 1152, 1187-88 (describiendo la severidad de los actos que hacen a familiares víctimas tales como ser testigo de la detención y el miedo por la seguridad del detenido).

jueces, sino como una realidad novedosa en la historia convulsiva de América latina.